

EL DESAFÍO PREVISIONAL PARA 2020

21 de OCTUBRE 2019

Uno de los mayores desafíos para 2020 es lograr el equilibrio fiscal. Argentina se ha quedado fuera de los mercados de capitales y por lo tanto necesita equilibrar las cuentas del Tesoro, para no depender de la emisión de pesos. En los últimos años se ha avanzado para achicar el déficit primario, pero el sistema previsional sigue estando fuertemente desequilibrado, generando dudas sobre su sustentabilidad futura. El problema principal está dado por la inadecuada relación existente entre la cantidad de aportantes al sistema y la cantidad de beneficiarios.

Pero a eso se ha sumado una reforma en el mecanismo de ajuste que ha agravado significativamente el desequilibrio del sistema.

El SIPA (Sistema Previsional Argentino) cuenta en la actualidad con 6,3 millones de beneficiarios únicos (que cobran al menos una jubilación o pensión). Esa cifra surge de la suma de 5,3 millones de jubilaciones, 1,7 millones de pensiones (hay 1,3 millones de beneficiarios que cobran jubilación y pensión) y 0,55 millones de beneficios No Contributivos.

A junio de 2019 el SIPA enfrentaba el pago a esos 6,3 Millones de beneficiarios con un haber medio de \$20.700 mensuales.

Aportantes 12,1 M

- Sector Privado 6,1 M
- Independientes 2 M
- Sector Público 3,2 M
- Casas Particulares y M. Social 0,9 M

Beneficiarios 6,3 M

- Beneficiarios Únicos 5,75 M
- Jubilaciones 5,3 M
- Pensiones 1,7 M
- No Contributivas 0,55 M

Para hacer frente a ese nivel de gasto, cuenta con los aportes de 12,1 millones de personas, pero que tienen diferentes niveles de ingresos y de aportes. Eso implica un ratio de aportantes sobre beneficiarios inferior a 2, con una composición donde el empleo privado formal apenas llega al 50%.

Del total de aportantes solamente 6,1 millones corresponden a empleo privado formal, con un ingreso medio del orden de los \$42.000 mensuales. El sector público cuenta con 3,2 millones de empleados, con un haber medio del orden de \$38.000 mensuales. Sobre este total hay que considerar que, entre aportes y contribuciones, el SIPA recauda en promedio el 27% de esos salarios.

Los casi 3 millones restantes corresponden a autónomos, monotributistas, trabajadores de casas particulares y monotributo social. En el caso de monotributistas y casas particulares, los aportes individuales son fijos y van desde \$500 a \$1.300 por mes dependiendo del nivel de facturación.

Estas cifras confirman que, aún sin afrontar todo el resto de los beneficios sociales ni los costos operativos de ANSES, el sistema es fuertemente deficitario y necesita de los aportes de rentas generales.

Son 12,1 millones de aportantes que generan una recaudación promedio de \$8.765 pesos por mes, para pagarle a 5,7 millones de beneficiarios un monto de \$21.475 pesos promedio por mes. Para que esa ecuación cierre se necesitarían al menos 2 millones adicionales de aportantes.

Pero la problemática no termina allí. En diciembre de 2017 se cambió la fórmula de ajuste de las prestaciones sociales, se pasó de un esquema de ajuste semestral (50% salario y 50% recaudación de Seguridad social)

a uno de ajuste trimestral (70% inflación y 30% salario). Si bien el esquema inicialmente generó un fuerte rechazo social, casi 2 años después se puede decir que ayudó a evitar una fuerte caída de las jubilaciones en términos reales. El esquema actual arroja a septiembre de 2019 un nivel de haber medio 5,5% superior al que hubiera existido con el esquema anterior, pero dada la inflación de los últimos meses, la brecha se seguirá ampliando. Según las estimaciones de evolución de salarios y de inflación, esa brecha podría superar el 20% para fines de 2020.

Al haberse incorporado la inflación como variable de ajuste (aunque con 6 meses de rezago) se protegió a las jubilaciones de una pérdida mayor en términos reales. En contrapartida esto implicó un mayor esfuerzo fiscal. A manera de ejemplo, el cambio de sistema en 2019 estaría implicando una mayor erogación en jubilaciones por \$140.000 millones (0,6% del PBI). Si se mantiene la tendencia, el mayor esfuerzo fiscal de 2020 sería de \$465.000 millones (1,5% del PBI)

Esto deja en evidencia una de las principales urgencias que deberá encarar el próximo gobierno, que es encontrarle solución al descalce entre los recursos de la seguridad social que evolucionan con el nivel de empleo y salario, de los gastos en jubilaciones que evolucionan de acuerdo con la inflación pasada. El esquema actual genera un beneficio fiscal cuando se acelera la inflación, pero un deterioro agudo de las cuentas públicas cuando se desacelera el ritmo de aumento de precios. Junto con la reestructuración de la deuda, resolver la problemática previsional es sin dudas el mayor desafío para 2020. Toda medida que genere ahorro fiscal implica una reducción en el ingreso de los jubilados y menor capacidad de consumo interno.

Por otro lado, estas cifras dejan claro que, sin reforma previsional, el esfuerzo fiscal deberá salir de otras vías (aumento de ingresos, ajuste de otros gastos, etc), porque más allá del déficit primario actual, las

erogaciones previsionales crecerán al ritmo de la inflación 2019 y los ingresos al nivel del aumento de empleo y salario que estarían claramente por debajo de esas cifras, acrecentando el desequilibrio fiscal. Según nuestras estimaciones, en un escenario en donde no se recupera el salario real, el esfuerzo fiscal necesario sería del orden del 1% del PBI.